

PRESENTACIÓN  
*José Thompson J.*

ATOS DE GENOCÍDIO E CRIMES CONTRA A HUMANIDADE:  
REFLEXÕES SOBRE A COMPLEMENTARIDADE DA  
RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DO INDIVÍDUO E DO ESTADO  
*Antônio Augusto Cançado Trindade*

EL NUEVO DESPERTAR DEL SISTEMA INTERAMERICANO  
DE DERECHOS HUMANOS. CAUSAS, RETOS Y OPORTUNIDADES EN EL LITIGIO  
*María Cielo Linares*

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL ARTÍCULO 21  
DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  
*Alejandro Díaz Pérez*  
*Daniela Aguirre Luna*

A APLICAÇÃO DO ARTIGO 8º DA CONVENÇÃO AMERICANA  
SOBRE DIREITOS HUMANOS ÀS CAUSAS CÍVEIS  
*Vitor Fonsêca*

JUSTICIABILIDAD DIRECTA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS,  
SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES.  
DESPUÉS DE LAGOS DEL CAMPO ¿QUÉ SIGUE?  
*Marcela Cecilia Rivera Basulto*

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES  
A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA DE LA  
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  
*Pamela Juliana Aguirre Castro*

A PROGRESSIVA PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS  
DAS MULHERES NO BRASIL: UM ESTUDO A PARTIR DA  
CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS  
*Ricardo Guerra Vasconcelos*  
*Júlia Fonseca Maia*

PANORAMA EN MÉXICO CON RESPECTO A LA  
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS  
*Alfonso Carrillo González*

A REPERCUSSÃO DO PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA  
NA ORDEM JURÍDICA DO BRASIL  
*Felipe Otávio Moraes Alves*  
*Micaela Amorim Ferreira*

REFLEXIONES SOBRE EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA JURISPRUDENCIA  
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  
SOBRE EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD  
*Pablo González Domínguez*

67

Enero - Junio 2018

REVISTA

IIDH INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS  
INSTITUT INTERAMÉRICAIN DES DROITS DE L'HOMME  
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS  
INTER-AMERICAN INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS

67

REVISTA IIDH

Enero - Junio 2018



REVISTA  
**IIDH**

Instituto Interamericano de Derechos Humanos  
Institut Interaméricain des Droits de l'Homme  
Instituto Interamericano de Direitos Humanos  
Inter-American Institute of Human Rights

Revista  
341.481

Revista IIDH/Instituto Interamericano de Derechos  
Humanos.-Nº1 (Enero/junio 1985)  
-San José, C. R.: El Instituto, 1985-  
v.; 23 cm.

Semestral

ISSN 1015-5074

1. Derechos humanos-Publicaciones periódicas

Las opiniones expuestas en los trabajos publicados en esta Revista son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no corresponden necesariamente con las del IIDH o las de sus donantes.

Esta revista no puede ser reproducida en todo o en parte, salvo permiso escrito de los editores.

*Corrección de estilo: José Benjamín Cuéllar M.*

*Portada, diagramación y artes finales: Marialyna Villafranca Salom*

*Impresión litográfica: Editorial Impresos Aguilar*

La Revista IIDH acogerá artículos inéditos en el campo de las ciencias jurídicas y sociales, que hagan énfasis en la temática de los derechos humanos. Los artículos deberán dirigirse a: Editores Revista IIDH; Instituto Interamericano de Derechos Humanos; A. P. 10.081-1000 San José, Costa Rica.

*Se solicita atender a las normas siguientes:*

1. Se entregará un documento en formato digital que debe ser de 45 páginas, tamaño carta, escritos en Times New Roman 12, a espacio y medio.
2. Las citas deberán seguir el siguiente formato: apellidos y nombre del autor o compilador; título de la obra (en letra cursiva); volumen, tomo; editor; lugar y fecha de publicación; número de página citada. Para artículos de revistas: apellidos y nombre del autor, título del artículo (entre comillas); nombre de la revista (en letra cursiva); volumen, tomo; editor; lugar y fecha de publicación; número de página citada.
3. La bibliografía seguirá las normas citadas y estará ordenada alfabéticamente, según los apellidos de los autores.
4. Un resumen de una página tamaño carta, acompañará a todo trabajo sometido.
5. En una hoja aparte, el autor indicará los datos que permitan su fácil localización (Nº fax, telef., dirección postal y correo electrónico). Además incluirá un breve resumen de sus datos académicos y profesionales.
6. Se aceptarán para su consideración todos los textos, pero no habrá compromiso para su devolución ni a mantener correspondencia sobre los mismos.

La Revista IIDH es publicada semestralmente. El precio anual es de US \$40,00. El precio del número suelto es de US\$ 25,00. Estos precios incluyen el costo de envío por correo regular.

Todos los pagos deben de ser hechos en cheques de bancos norteamericanos o giros postales, a nombre del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Residentes en Costa Rica pueden utilizar cheques locales en dólares. Se requiere el pago previo para cualquier envío.

Las instituciones académicas, interesadas en adquirir la Revista IIDH, mediante canje de sus propias publicaciones y aquellas personas o instituciones interesadas en suscribirse a la misma, favor dirigirse al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, A. P. 10.081-1000 San José, Costa Rica, o al correo electrónico: s.especiales2@iidh.ed.cr.

**Publicación coordinada por Producción Editorial-Servicios Especiales del IIDH**

**Instituto Interamericano de Derechos Humanos**  
Apartado Postal 10.081-1000 San José, Costa Rica  
Tel.: (506) 2234-0404 Fax: (506) 2234-0955  
e-mail:s.especiales2@iidh.ed.cr  
**www.iidh.ed.cr**

## Índice

<b>Presentación</b> .....	7
<i>José Thompson J.</i>	
Atos de genocídio e crimes contra a humanidade: reflexões sobre a complementaridade da responsabilidade internacional do indivíduo e do Estado.....	13
<i>Antônio Augusto Cançado Trindade</i>	
El nuevo despertar del sistema interamericano de derechos humanos. Causas, retos y oportunidades en el litigio.....	51
<i>María Cielo Linares</i>	
Análisis de la evolución jurisprudencial del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos .....	85
<i>Alejandro Díaz Pérez</i> <i>Daniela Aguirre Luna</i>	
A aplicação do artigo 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos às causas cíveis.....	111
<i>Vitor Fonsêca</i>	
Justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Después de Lagos del Campo ¿qué sigue? .....	131
<i>Marcela Cecilia Rivera Basulto</i>	
Los derechos económicos, sociales y culturales a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos .....	155
<i>Pamela Juliana Aguirre Castro</i>	

A progressiva proteção e promoção dos direitos das mulheres no Brasil: um estudo a partir da Convenção Americana sobre Direitos Humanos .....	203
<i>Ricardo Guerra Vasconcelos</i>	
<i>Júlia Fonseca Maia</i>	
Panorama en México con respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos .....	231
<i>Alfonso Carrillo González</i>	
A repercussão do Pacto de San José da Costa Rica na ordem jurídica do Brasil .....	255
<i>Felipe Otávio Moraes Alves</i>	
<i>Micaela Amorim Ferreira</i>	
Reflexiones sobre el pasado, presente y futuro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el control de convencionalidad.....	283
<i>Pablo González Domínguez</i>	

## Presentación

Con la aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la CADH) el 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica, se inició una nueva era en la protección de la persona humana en el hemisferio. Su entrada en vigor, el 18 de julio de 1978, trajo consigo la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH) –uno de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos (en adelante el SIDH)– con facultades supranacionales para conocer casos de violaciones a este tratado por los Estados parte que, por tal razón, hubiesen incurrido en responsabilidad internacional y previamente aceptaran someterse a su jurisdicción.

En 1987, la Corte IDH conoció su primer caso: Velásquez Rodríguez contra Honduras. A partir de entonces, ha emitido un total de 354 sentencias de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas o interpretación de sus fallos; a este vasto acervo jurisprudencial se suman 25 opiniones consultivas en los más diversos asuntos. Con su labor interpretativa de la CADH, la Corte IDH ha ampliado el impacto del tratado interamericano de manera tal que –cuarenta años después de su entrada en vigor– los derechos humanos se han convertido en un “idioma universal” y una nueva ética que coloca a las personas en el centro de las actuaciones, tanto del Estado y sus instituciones como de la diversidad de actores que intervienen en la escena política de nuestros países. Ese es el horizonte a alcanzar en este terreno puesto que –pese a los avances que se observan a

lo largo de las cuatro décadas transcurridas– persisten riesgos, problemáticas y retrocesos en la protección de las poblaciones discriminadas, excluidas y vulnerabilizadas en la región así como en la realización de su dignidad y sus derechos.

El presente número de la Revista IIDH –publicada ininterrumpidamente desde 1985– es monográfico y está dedicado al 40° aniversario de la entrada en vigor de la CADH y la instalación de la Corte IDH, lo que constituye un doble motivo de conmemoración. En esta edición se incluyen diez artículos en los cuales se reflexiona y analizan la evolución, la interpretación y la aplicación de dicho tratado, cuyas reseñas se ofrecen a continuación.

María Cielo Linares, en *El nuevo despertar del sistema interamericano. Causas y efectos*, expone las razones intrínsecas y extrínsecas que –a su juicio– han incidido en la labor de los órganos del SIDH. Además, se refiere a la tecnificación y los altos estándares de profesionalización de la labor de los diferentes actores del mismo que han conducido a desarrollos jurisprudenciales notables, como el relacionado con el artículo 26 de la CADH en el caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros contra Perú, del 23 de noviembre de 2017.

Alejandro Díaz Pérez y Daniela Aguirre Luna, autores del trabajo denominado *Análisis de la evolución jurisprudencial del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos*, revisan el desarrollo del reconocimiento y de la protección de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas del continente. Para ello, parten del fallo en el caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua y concluyen con la decisión más reciente: la del caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros contra Brasil; también exploran otras líneas jurisprudenciales que ampliarían el efecto útil de la CADH en este campo.

En el artículo *A aplicação do artigo 8º. da Convenção Americana sobre Direitos Humanos às causas cíveis*, Vitor Fonsêca analiza la jurisprudencia de la Corte IDH en sus competencias consultiva y contenciosa respecto de la aplicación de dicho artículo a causas distintas de las penales, lo que –asegura– conferiría una mayor protección de los derechos humanos.

En su artículo *Justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales. Después de Lagos del Campo, ¿qué sigue?*, Marcela Cecilia Rivera Basulto se refiere al primer pronunciamiento de la Corte IDH sobre la vulneración del artículo 26 de la CADH relativo al desarrollo progresivo de los DESC en el caso aludido párrafos arriba, que constituye un hito en la historia del SIDH al señalar la responsabilidad del Estado peruano por la violación del derecho al trabajo lo cual trae consigo importantes retos para su garantía en el orden supranacional, específicamente para el alto tribunal regional.

Ricardo Guerra Vasconcelos y Júlia Fonseca Maia, autores de *A progressiva proteção e promoção dos direitos das mulheres no Brasil: um estudo a partir da Convenção Americana de Direitos Humanos*, tomando como referencia el caso Maria da Penha contra Brasil, evalúan el respeto y la vigencia de los derechos humanos de las mujeres en este país, su incorporación al ordenamiento jurídico, las actuaciones estatales en la formulación de políticas públicas y legislación en materia de violencia contra las mujeres, su desempeño respecto de los tratados interamericanos en la materia –como la Convención de Belém do Pará además de la CADH– y la importancia de ambos instrumentos internacionales en la protección de los derechos de las brasileñas.

Felipe Otávio Moraes Alves y Micaela Amorim Ferreira, quienes contribuyeron con el artículo *A repercussão do Pacto San José da Costa Rica na ordem jurídica do Brasil*, analizan los impactos de la CADH en su país a partir de la promulgación de la Constitución Federal de 1988 y los fallos condenatorios proferidos por la Corte IDH en casos brasileños, así como su recepción e implementación en el ordenamiento jurídico interno.

Para elaborar el artículo *Panorama en México con respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos*, Alfonso Carrillo González revisó los criterios emitidos por los tribunales desde la aprobación de la CADH en 1969, disponibles en el portal de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta forma establece cómo ha evolucionado la protección jurídica de los derechos humanos en su país a la luz de las disposiciones contenidas en dicho tratado, en un proceso que le permitió constatar la persistencia de prácticas judiciales que las contravienen.

Pablo González Domínguez, en su aporte titulado *Reflexiones sobre el pasado, presente y futuro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre control de convencionalidad*, explora la jurisprudencia relativa al mismo desarrollando el contenido del artículo 2 de la CADH desde el caso Suárez Rosero contra Ecuador de 1997 hasta la Opinión Consultiva OC-24/17 de 2017, relacionada con la protección de las personas diversas sexualmente.

Finalmente, Pamela Juliana Aguirre Castro, en el artículo *Los derechos económicos, sociales y culturales a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, aborda el debate en torno a la justiciabilidad o exigibilidad directa de estos derechos y la jurisprudencia relevante de la Corte IDH respecto de sus contenidos, así como

los retos interpretativos y argumentativos que debe afrontar dicho tribunal regional para continuar trabajando en esta línea.

\*\*\*

En esta oportunidad, para conmemorar el aniversario de la entrada en vigor de la CADH, la Revista IIDH tiene el honor de incluir también un artículo del jurista Antônio Augusto Cançado Trindade quien fuera juez y presidente de la Corte IDH; en la actualidad es juez de la Corte Internacional de Justicia.

Contar con su colaboración académica en este contexto resulta una conmemoración en sí misma, ya que la evolución del SIDH difícilmente podría explicarse sin considerar los aportes que para ello significó su trayectoria; a partir de su búsqueda de justicia, la cual impulsó desde el derecho internacional de los derechos humanos con rigurosidad jurídica pero siempre teniendo presentes el sufrimiento y las necesidades de las víctimas.

El desempeño de don Antônio Augusto Cançado Trindade –director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos entre 1994 y 1996, actualmente miembro de su Asamblea General– es invaluable, pues durante su desempeño como juez de la Corte IDH promovió nuevas líneas jurisprudenciales con base en criterios jurídicos innovadores en la interpretación y aplicación tanto de la CADH como de otros tratados interamericanos y universales, en aras de la mejor protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos y la restitución de su dignidad.

Su colaboración a este número monográfico de la Revista IIDH se suma a la conmemoración referida como mejor podría hacerse desde el ámbito académico e investigativo del IIDH, con una disertación relevante que nos invita a reflexionar sobre

las aproximaciones y los avances de las distintas vertientes del derecho para la protección huamana.

En ese sentido, en su artículo denominado *Atos de genocídio e crimes contra a humanidade: reflexões sobre a complementaridade da responsabilidade internacional do indivíduo e do Estado*, se hace una relectura de la jurisprudencia relativa a estos delitos emitida tanto por tribunales penales internacionales como por la Corte IDH. Asimismo, comparte sus reflexiones sobre la complementariedad de la responsabilidad del individuo y del Estado en un contexto de “aproximaciones y convergencias” entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional.

El IIDH valora y agradece el aporte de los autores y las autoras de los artículos contenidos en esta nueva Revista IIDH; celebra también que a estos se sume la invaluable colaboración de don Antônio y espera que las reflexiones vertidas en este número sean relevantes para la academia, la sociedad civil y las entidades estatales para que –desde cada uno de esos ámbitos– se impulse la implementación de los estándares internacionales que se han gestado y que han evolucionado en los 40 años de vigencia del Pacto de San José.

José Thompson J.  
*Director Ejecutivo, IIDH*



# **A aplicação do artigo 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos às causas cíveis**

*Vitor Fonsêca\**

## **1. Introdução**

O objeto do presente estudo é a interpretação da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) sobre a aplicação do artigo 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH). Mais especificamente, delimitou-se o tema à aplicação do artigo 8º da CADH às causas cíveis.

O objetivo é saber se a jurisprudência da Corte IDH aplica o artigo 8º da CADH às causas cíveis (e em que medida). O fim específico é saber se o artigo 8º da CADH pode ou não ser um *standard* internacional para o processo civil ou se o artigo 8º da Convenção é de aplicação exclusiva do processo penal.

A importância da pesquisa é demonstrada pela enorme e vasta jurisprudência da Corte IDH sobre as garantias judiciais previstas no artigo 8º da CADH. Desde seus primeiros casos

---

\* Mestre e Especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Secretário Adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas.



contenciosos e entre vários pareceres consultivos<sup>1</sup>, a Corte IDH sempre debruçou-se sobre a interpretação do artigo 8º da CADH. Demonstrar que o artigo 8º da CADH é também aplicável às causas cíveis significa conferir maior proteção de direitos humanos também no âmbito do processo civil.

Para tanto, iniciou-se discutindo a redação do artigo 8º da CADH e seus eventuais obstáculos para sua aplicação às causas cíveis. Seria possível ultrapassar a redação literal do artigo ao mencionar “pessoa acusada de delito” e “acusação penal”?

Após essa interpretação do texto do artigo, passou-se a analisar a evolução da jurisprudência da Corte IDH sobre a aplicação do art. 8º da CADH.

De início, demonstrou-se como os pareceres consultivos da Corte IDH trataram do tema em casos não-contenciosos.

Depois disso, passou-se a analisar a jurisprudência da Corte IDH sobre a aplicação genérica do artigo 8.1 da CADH às causas cíveis para, depois, focalizar os casos de aplicação do artigo 8.2 da CADH. A justificativa para essa divisão seria encontrar eventual tratamento diferenciado da jurisprudência da Corte IDH em relação à aplicação das garantias mínimas previstas no artigo 8.2 da CADH às causas cíveis.

Ao final, explica-se quais as consequências da aplicação ou não do artigo 8º da CADH às causas cíveis.

---

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Parecer Consultivo OC-9/87*; Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Parecer Consultivo OC-11/90*; Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Parecer Consultivo OC-16/99*.

## 2. A Redação Do Artigo 8º Da CADH

A redação do artigo 8º. da CADH pode dar a impressão de fechar as portas para eventual aplicação das garantias judiciais ali previstas às causas cíveis. A redação do artigo 8.1 da CADH é a seguinte: “[t]oda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza”.

Além de tratar de “acusação penal” no artigo 8.1, o artigo 8.2 trata de direitos da “pessoa acusada de delito” (artigo 8.2), do “direito do acusado” (artigo 8.2.a, 8.2.c, 8.2.d), de “confissão do acusado” (artigo 8.3), de “acusado absolvido” (artigo 8.4) e até em “processo penal” (artigo 8.5).

Ao fazer tantas referências a “pessoa acusada de delito” e “acusado”, o artigo 8º da CADH limita aquelas garantias judiciais às causas penais?

Essa dificuldade diz respeito a uma interpretação meramente literal do artigo. Apesar de fazer referência a “acusação penal”, “pessoa acusada de delito” e “acusado”, o artigo 8.1, em sua parte final, fala em “ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza”. Ou seja: as garantias judiciais devem ser respeitadas na acusação penal, mas também em causas não-penais para determinar direitos ou obrigações.

Deve-se perceber que o artigo 8.1 da CADH tem uma cláusula de abertura. Além de dizer que as garantias são aplicáveis às causas cíveis, trabalhistas ou fiscais, o mesmo artigo 8.1 diz que as garantias devem ser respeitadas para a determinação de

direitos ou obrigações “de qualquer natureza”. O artigo permite que as garantias judiciais previstas na CADH sejam aplicáveis em várias causas, e não apenas no rol taxativo de causas penais, cíveis, trabalhistas ou fiscais.

Assim sendo, se, por um lado, o artigo 8.2 da CADH parece ser um obstáculo à aplicação das garantias judiciais às causas cíveis – pois o artigo menciona “acusado” e “pessoa acusada de delito” -, ao mesmo tempo o artigo 8.1 da CADH abre essa possibilidade ao dizer expressamente que o artigo é aplicável na apuração de qualquer acusação penal, mas também em qualquer causa para determinar direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

Vejamos agora como a competência consultiva da Corte IDH interpreta a aplicação do artigo 8º da CADH.

### **3. A aplicação do Artigo 8º da CADH às causas cíveis na competência consultiva**

Em sua competência consultiva, a Corte IDH já vinha se manifestando pela possibilidade de aplicação do artigo 8º da CADH muito além das causas penais.

No Parecer Consultivo OC-9/1987, a Corte IDH havia entendido que, ao tratar de “garantias judiciais”, o artigo 8º da Convenção pode induzir à confusão de que estas garantias são consagradas apenas no meio “judicial” em sentido estrito. No entanto, segundo a Corte IDH, “o artigo 8º não contém um recurso judicial propriamente dito, mas o conjunto de requisitos que devem ser observados nas instâncias processuais”<sup>2</sup>.

---

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Parecer Consultivo OC-9/87, § 27.

Esse mesmo entendimento foi repetido no Parecer Consultivo OC-11/1990<sup>3</sup>, quando a Corte IDH indicou, expressamente, que as devidas garantias do artigo 8.2 da CADH aplicam-se na determinação de direitos e obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza, constantes do artigo 8.1 também da CADH. Segundo a Corte IDH, o indivíduo também tem direito ao devido processo que se aplica em matéria penal às causas não-penais.

Já na OC-17/2002<sup>4</sup> a Corte IDH também decidiu aplicável o artigo 8º da CADH aos procedimentos judiciais ou administrativos “em que se decidem direitos das crianças”, devendo-se respeitar as garantias do juiz natural, do direito de recorrer e da presunção de inocência, por exemplo. O mais importante é que a Corte IDH não limitou, nesse caso, a aplicação do artigo 8º às causas penais.

Pode-se perceber, portanto, que a Corte IDH, em sua competência consultiva, já dava sinais de que a aplicação do artigo 8º da CADH não se restringia às causas penais. Pelo contrário, na OC-11/1990, há clara tomada de posição da Corte IDH sobre a aplicação do artigo 8º às causas cíveis, trabalhistas, fiscais ou de qualquer outra natureza.

Passamos agora à análise dos casos contenciosos da Corte IDH para aplicação do artigo 8º da CADH às causas cíveis.

---

3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Parecer Consultivo OC-11/90, § 28.

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Parecer Consultivo OC-17-2002, §§ 115-134.

#### 4. A aplicação do Artigo 8º da CADH às causas cíveis na competência contenciosa

Em sua competência contenciosa, a Corte IDH já entendeu muitas vezes ser aplicável o artigo 8º a causas não-penais<sup>5</sup>. São vários os casos envolvendo a aplicação do artigo 8º da CADH a causas cíveis, conforme os exemplos seguintes.

No Caso *Furlán Vs. Argentina*<sup>6</sup>, o centro das discussões foi uma ação cível de indenização. A Corte IDH foi chamada a se manifestar sobre a aplicação da garantia do prazo razoável em uma ação cível de indenização por danos. Um adolescente de quatorze anos adentrou um prédio abandonado do Exército argentino, onde não havia qualquer tipo de proteção, cerca ou obstáculo que impedisse o ingresso de crianças no local. O adolescente pendurou-se numa viga de 50kg e a peça caiu sobre sua cabeça, causando-lhe sequelas físicas e cognitivas. A ação cível foi proposta em 18/12/1990 e o pagamento dos danos somente se realizou em 12/03/2003. A Corte IDH entendeu que a resposta judicial (12 anos depois) não obedeceu à garantia do prazo razoável prevista no artigo 8º da CADH.

No Caso *Atala Riffo e filhas Vs. Chile*<sup>7</sup>, o objeto da discussão foi também uma ação cível. Mediante sentença judicial confirmada pela Corte Suprema de Justiça do Chile, a senhora Karen Atala Riffo perdeu a guarda de suas três filhas em razão

5 Juan Carlos Hitters e Oscar L. Fappiano, *Derecho internacional de los derechos humanos*, p. 466 e 485-491; Juana María Ibáñez, Artículo 8: garantías judiciales, *Convención Americana sobre Derechos Humanos: comentario*, Coordenação de Christian Steiner e Patricia Uribe, La Paz, Konrad Adenauer Stiftung, 2014, p. 211.

6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Furlán Vs. Argentina*, §§ 147-148.

7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Atala Riffo e filhas Vs. Chile*, §§ 196-208.

de sua orientação sexual. Naquela ocasião, a Corte IDH entendeu que o artigo 8º da CADH aplicava-se a causas cíveis, inclusive quanto ao direito das crianças, filhas da ré, de serem ouvidas no processo.

Já no Caso *Lagos del Campo Vs. Peru*<sup>8</sup> julgado em 2017, analisou-se um processo trabalhista. No caso, discutia-se a legalidade de uma demissão ocasionada após uma entrevista em que um trabalhador denunciou chantagens e coerções por parte do empregador. Após ser demitido por “falta grave”, o trabalhador recorreu à justiça trabalhista, mas perdeu em segunda instância. Os tribunais peruanos, porém, nunca deram atenção aos argumentos do trabalhador sobre sua estabilidade laboral.

Além disso, também a Corte IDH vem reiteradamente manifestando-se pela aplicabilidade do artigo 8º a julgamentos “não-jurisdicionais”, sejam de natureza política, administrativa ou eleitoral.

Discutia-se, no Caso do Tribunal Constitucional Vs. Peru<sup>9</sup>, a destituição de três magistrados dos cargos que ocupavam no Tribunal Constitucional do Peru. Segundo as provas dos autos, os juizes foram afastados pelo Congresso por motivos políticos. A Corte IDH entendeu que o procedimento de julgamento político ao qual foram submetidos os magistrados destituídos - julgamento conduzido e realizado pelo Poder Legislativo - não lhes assegurou as garantias do devido processo legal e não foi cumprido o requisito da imparcialidade do julgador previsto no artigo 8º da CADH.

8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Lagos del Campo Vs. Peru*, §§ 173-191.

9 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso do Tribunal Constitucional Vs. Peru*, §§ 66-85.

A Corte IDH estende as garantias do artigo 8º, outrossim, aos processos administrativos. Historicamente, aliás, o termo “tribunal” foi utilizado para incluir os tribunais de natureza jurisdicional e os de natureza administrativa, de modo a estabelecer o direito ao *fair trial* sempre que uma pessoa for acusada de um delito ou está sujeita a uma demanda de natureza civil, trabalhista, fiscal ou outra natureza<sup>10</sup>.

No Caso Baena Ricardo e outros Vs. Panamá<sup>11</sup>, a Corte IDH julgou a demissão de 270 servidores públicos e dirigentes sindicais por terem participado de protestos contra o Governo. A exoneração dos servidores foi realizada pela simples entrega de uma “carta” aos que participaram de um protesto contra a política governamental de direitos trabalhistas. A Corte IDH entendeu que, apesar de o artigo 8º fazer referência a “garantias judiciais” em seu título, sua aplicação não se limita aos recursos judiciais “em sentido estrito”, mas a um conjunto de requisitos que devem ser observados nas “instâncias processuais”. Ou seja: qualquer atuação ou omissão dos órgãos do Estado dentro do processo, seja administrativo sancionatório ou jurisdicional, deve respeitar o devido processo legal. Por isso, - concluiu a Corte IDH - ao impor a sanção de demissão, o Estado deve garantir ao trabalhador o “devido processo”, nos termos do artigo 8º da CADH, a ser garantido tanto em matéria penal como em matéria não-penal.

Do mesmo modo, no Caso Ivcher Bronstein Vs. Peru<sup>12</sup>, um israelense naturalizou-se peruano e se tornou sócio majoritário

10 Louis B. Sohn e Thomas Buergenthal, *International protection of human rights*, Nova Iorque, Bobbs Merrill, 1973, p. 1366.

11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Baena Ricardo e outros Vs. Panamá*, §§ 122-125.

12 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Ivcher Bronstein Vs. Peru*, § 104.

de um canal de televisão que fazia propaganda anti-governista. Um órgão administrativo, baseado em lei peruana posterior, tornou sem efeito o título da nacionalidade, razão pela qual Bronstein perdeu sua condição de sócio majoritário. A Corte IDH entendeu que mesmo órgãos administrativos - como um órgão de migrações e de naturalização - têm o dever de decidir sempre em respeito às garantias do devido processo, estabelecidas no artigo 8º da CADH.

Por fim, no Caso Yatama Vs. Nicarágua<sup>13</sup>, a Corte IDH teve que analisar se uma decisão administrativa do Conselho Supremo Eleitoral deveria ou não respeitar o artigo 8º da CADH. Tal decisão de natureza eleitoral excluiu os candidatos de um partido político regional indígena (Yatama) das eleições municipais do ano 2000. Segundo a Corte IDH, as decisões emitidas por órgãos internos em matéria eleitoral podem afetar o gozo de direitos políticos. Por isso, também nesse âmbito eleitoral, devem ser observadas as garantias do artigo 8º da CADH.

Verifica-se, então, que, apesar da redação do artigo 8.1 da CADH, a jurisprudência da Corte IDH entende que as causas não-penais também estão investidas de garantias judiciais<sup>14</sup>.

## 5. A aplicação das garantias mínimas do Artigo 8.2 da CADH às causas cíveis

Não bastasse o entendimento da Corte IDH de que o artigo 8.1 da CADH é aplicável às causas cíveis, a evolução da jurisprudência do tribunal demonstrou que mesmo as garantias mínimas do artigo 8.2 da CADH seriam aplicáveis às causas cíveis.

13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Yatama Vs. Nicarágua*, § 150.

14 Fernando G. Jayme, *Direitos humanos e sua efetivação pela Corte Interamericana de Derechos Humanos*, Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 138.

O texto do artigo 8.2 da CADH dá a ideia de que aquelas garantias mínimas também são conteúdo exclusivo das causas penais. Logo no início do artigo 8.2 da CADH, lê-se que “[t]oda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa”. Entre as garantias mínimas previstas nos incisos do artigo 8.2 da CADH, encontram-se textualmente as expressões “direito do acusado”, “comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada”, “concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa”, entre outras. Todas as expressões, como se vê, falam de um “acusado” e de uma “acusação penal”, de uma presunção de inocência e de prova da culpa. Presume-se que essas garantias mínimas do art. 8.2 da CADH, então, sejam exclusivas das causas penais.

Essa presunção não se confirma. A jurisprudência da Corte IDH tem evoluído para aplicar gradualmente as garantias mínimas do artigo 8.2 da CADH às causas cíveis. Não obstante a literalidade do artigo 8.2 ao enunciar “pessoa acusada de delito”, “acusado” e “acusação”, a Corte IDH entende serem aplicáveis às causas cíveis as garantias mínimas do artigo 8.2 da CADH<sup>15</sup>.

O motivo é o seguinte: o artigo 8.1 dispõe que toda pessoa tem direito a ser ouvida, “com as devidas garantias”, para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. O artigo 8.1 não diz quais são as “garantias mínimas” aplicáveis às causas cíveis. A Corte IDH entende, então, que “o conceito de devidas garantias se aplica também a essas matérias e, por isso, nesse tipo de matérias o indivíduo tem direito também ao devido processo que se aplica em matéria penal”. Para saber se uma garantia é aplicável ou não,

15 Juan Carlos Hitters e Oscar L. Fappiano, *Derecho internacional de los derechos humanos*, t. 2, v. 1, Buenos Aires, Ediar, 2012, p. 551-583.

porém, é preciso antes verificar as circunstâncias de cada caso e de cada ordenamento jurídico<sup>16</sup>.

No que se refere ao direito à presunção de inocência, o artigo 8.2 dispõe que “[t]oda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa”. À primeira vista, parece ser um direito exclusivamente exercido no processo penal, mas os precedentes da Corte IDH parecem indicar que qualquer “autoridade pública” – incluindo o juiz cível - deve respeitar o direito à presunção de inocência. A jurisprudência da Corte IDH caminha no sentido de ampliar a presunção de inocência para causas não-penais.

Esse direito foi exigido, por exemplo, em processos administrativos<sup>17</sup>, ocasião em que a Corte IDH definiu que a “presunção administrativa” é uma das garantias estabelecidas no artigo 8º da CADH<sup>18</sup>.

Em 2001, no Caso Baena Ricardo e outros Vs. Panamá<sup>19</sup>, discutia-se a demissão de 270 servidores públicos. O Estado alegou que não seria cabível falar em “presunção de inocência” em processo contencioso-administrativo, pois se trataria de uma “garantia penal”. A Corte IDH respondeu que, em qualquer matéria, inclusive trabalhista ou administrativa, a administração

16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Parecer Consultivo OC-11/90*, §§ 28 e 29.

17 Caio Paiva e Thimothie Aragon Heemann, *Jurisprudência internacional de direitos humanos*, Manaus, Dizer o Direito, 2015, p. 143-144.

18 Salvador Herencia Carrasco, *El derecho de defensa en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y derecho penal internacional*, Coordenação de Kai Ambos *et al.*, Berlim, Konrad Adenauer Stiftung, 2010, p. 361-364.

19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Baena Ricardo e outros Vs. Panamá*, § 126.



tem limites nos direitos humanos, pois “não pode a administração proferir atos administrativos sancionatórios sem conferir aos sancionados a garantia do devido processo”.

No Caso *López Mendonza Vs. Venezuela*<sup>20</sup>, um prefeito foi considerado inabilitado para o exercício da função pública e considerado inelegível em razão de processo administrativo. Embora a Corte IDH não tenha encontrado provas de que administrativamente o prefeito tenha sido considerado “culpado” desde o início, a maior relevância desse caso é o fato de ter sido levada à Corte IDH uma violação do direito à presunção de inocência em processo de controle administrativo, e não penal.

Também se aplica às causas cíveis o “direito de defesa do acusado” (artigo 8.2.d, CADH). No Caso do Tribunal Constitucional Vs. Peru<sup>21</sup>, por exemplo, a Corte IDH invocou o direito de defesa para apontar que, num julgamento de juízes pelo Poder Legislativo, os réus não tiveram direito de participar do processo, pois: 1) não tiveram acesso ao conteúdo completo da acusação; 2) não tiveram oportunidade de contraditar o depoimento de testemunhas e nem puderam apresentar provas em contrário; 3) tiveram somente o prazo de 48 horas para se defender. A Corte IDH, no entanto, condenou ao final o Estado por violação genérica ao artigo 8º da CADH.

O Estado foi condenado por violação ao artigo 8.2 da CADH no Caso *Baena Ricardo e outros Vs. Panamá*<sup>22</sup>. A Corte IDH considerou que a demissão de 270 servidores públicos, sem o

---

20 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso López Mendonza Vs. Venezuela*, §§ 126-133.

21 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso do Tribunal Constitucional Vs. Peru*, §§ 78-85.

22 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Baena Ricardo e outros Vs. Panamá*, §§ 129-134.

direito de defesa, teve graves consequências socioeconômicas para as pessoas demitidas e seus familiares e dependentes. Por isso, para a aplicação dessa sanção disciplinar, o Estado deveria garantir aos servidores o devido processo com as garantias do artigo 8.2 da CADH.

Já no Caso *Ivcher Bronstein Vs. Peru*<sup>23</sup> a Corte IDH condenou o Estado por violação ao artigo 8.2, mesmo se tratando de causa cível, e não penal. Nesse caso, um processo administrativo tornou sem efeito a naturalização da vítima, por suposta adulteração de documento. No entanto, o órgão administrativo nunca comunicou à vítima essa situação nem lhe permitiu explicar suas razões ou apresentar provas em contrário. A vítima foi impedida de intervir com pleno conhecimento de todas as etapas do processo administrativo. Por isso, com fundamento no artigo 8.2, a Corte IDH entendeu violado o direito de defesa.

Houve também condenação do Estado no Caso *Vélez Loor Vs. Panamá*<sup>24</sup> pelo artigo 8.2 em hipótese de processo administrativo de deportação. A Corte IDH entendeu que, se a vítima puder ser deportada pelo Estado, deve lhe ser garantido o direito de defesa, previsto especialmente nos incisos “d” (direito de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor) e “e” (direito de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado) do artigo 8.2. Como já havia antes declarado, a Corte IDH entendeu que, em procedimentos administrativos ou judiciais nos quais se possa adotar uma decisão que implique a deportação, expulsão ou privação de liberdade, “a prestação de um serviço público gratuito de defesa legal a favor delas [das vítimas] é necessária para evitar a vulneração do direito às garantias do devido processo”.

---

23 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Ivcher Bronstein Vs. Peru*, §§ 101-116.

24 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Vélez Loor Vs. Panamá*, § 145.

Verifica-se, assim, que a jurisprudência da Corte IDH evoluiu para aplicar as garantias mínimas do artigo 8.2 da CADH também às causas cíveis.

No entanto, há críticas a essa aplicação do artigo 8.2 da CADH às causas cíveis. Diz-se que a jurisprudência da Corte IDH nunca foi clara em distinguir o que é uma “causa penal” ou uma “acusação penal”. Por outro lado, há casos em que as garantias mínimas do artigo 8.2 regulam diferentemente o devido processo nas causas penais. A ampla interpretação da Corte IDH exigiria dos Estados o estabelecimento de “todas as garantias mínimas em todo tipo de procedimento, o que, algumas vezes, parecerá excessivo”<sup>25</sup>.

As críticas à aplicação generalizada das garantias mínimas do artigo 8.2 da CADH às causas cíveis devem ser ouvidas com atenção. De fato, transportar às causas cíveis todas as garantias mínimas pode gerar excessos. Basta pensar, por exemplo, no “direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado” (artigo 8.2.e, CADH). Se interpretada com rigor essa garantia mínima do art. 8.2, pode significar que todo réu revel em ações cíveis deve ter o direito de lhe ser nomeado um defensor.

Não parece, contudo, que a jurisprudência da Corte IDH pretende estabelecer “todas as garantias mínimas em todo tipo de procedimento”. Pelo contrário: no Parecer Consultivo OC-11/90, a Corte IDH discutiu se era necessário ou não nomear um advogado em caso de um indigente que não pode pagar advogado. Por isso, em competência consultiva, a Corte IDH discutiu se seria ou não sempre exigível, em causas não-penais, a aplicação do artigo 8.2.d e 8.2.e da CADH. A Corte IDH entendeu que “as circunstâncias

25 Cecilia Medina Quiroga, *La Convención Americana: vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso y recurso judicial*, Santiago, Universidad de Chile, 2003, p. 285 e 291.

de um procedimento específico, seu significado, seu caráter e seu contexto em um sistema particular são fatores que fundamentam a determinação se a assistência jurídica é ou não necessária para o devido processo”. Ou seja: a conclusão da Corte IDH é a de que a aplicação do artigo 8º da CADH não é automática, pois depende de cada caso, para se saber se aquela garantia mínima é ou não necessária para o devido processo legal.

## 6. A reconstrução do conceito de devido processo legal e de juiz/tribunal

O estudo dos casos consultivos e contenciosos apresentados demonstrou que as garantias judiciais do artigo 8º da CADH aplicam-se a uma infinidade de causas não-penais. Há ainda dois efeitos dessa conclusão.

O primeiro efeito diz respeito ao conceito de devido processo legal. Parece haver concordância de que os Estados devem obedecer ao devido processo legal dentro do processo. No entanto, a jurisprudência da Corte IDH dá a entender que o devido processo legal não é exclusivo do processo jurisdicional<sup>26</sup>. O devido processo legal deve ser reservado às pessoas que se defendem contra qualquer ato emanado do Estado que possa afetar seus direitos, seja o ato jurisdicional ou não<sup>27</sup>.

26 Juan Carlos Hitters e Oscar L. Fappiano, *Derecho internacional de los derechos humanos*, t. 2, v. 1, Buenos Aires, Ediar, 2012, p. 481.

27 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Ivcher Bronstein Vs. Peru*, § 102; Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso do Tribunal Constitucional Vs. Peru*, § 69; Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Yatama Vs. Nicaragua*, § 147; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Parecer Consultivo OC-17-2002, §§ 117.



Em várias de suas decisões, no âmbito contencioso ou consultivo, a Corte IDH vem repetindo que o Estado, “em qualquer ação ou omissão dos órgãos do Estado dentro de um processo, seja administrativo sancionatório ou jurisdicional, deve respeitar o devido processo legal”<sup>28</sup>. Não é necessário, portanto, examinar a natureza e as características da causa, pois, em princípio, “praticamente toda determinação de direitos e obrigações está coberta pelas garantias”<sup>29</sup>.

Em alguns casos, por fim, a conclusão da Corte IDH tem sido a seguinte, com a mesma redação sempre: “Toda pessoa sujeita a um julgamento de qualquer natureza diante de um órgão do Estado deverá contar com a garantia de que esse órgão seja imparcial e atue nos termos do procedimento legalmente previsto para o conhecimento e a solução do caso que é submetido”<sup>30</sup>.

Isso indica que, para a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o conceito de devido processo legal nunca foi uma experiência unicamente jurisdicional. O devido processo legal é inerente a toda a atividade do Estado que de alguma forma vá afetar os direitos e obrigações das pessoas.

Essa conclusão é interessante, pois dela surge o segundo efeito da aplicação do artigo 8º da CADH às causas não-penais.

---

28 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Baena Ricardo e outros Vs. Panamá*, §§ 122-125; Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Parecer Consultivo OC-18/03*, § 123.

29 Cecilia Medina Quiroga, *La Convención Americana: vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso y recurso judicial*, Santiago, Universidad de Chile, 2003, p. 283.

30 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica*, § 169; Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso do Tribunal Constitucional Vs. Peru*, § 77; Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Almonacid Arellano e outros Vs. Chile*, § 130.

A partir da jurisprudência da Corte IDH, vê-se também surgir um conceito material de “juiz ou tribunal”<sup>31</sup>.

A Corte IDH fala em “julgamento de qualquer natureza diante de um órgão do Estado”, e não de juiz ou tribunal. Para a aplicação do devido processo legal, importa pouco se o órgão julgador é “juiz” ou não: qualquer autoridade pública, seja administrativa, legislativa ou judicial, deve obedecer ao devido processo legal.

Para a observância do devido processo legal, basta que a decisão emanada pelo Estado tenha conteúdo jurisdicional. Ou seja: a natureza da decisão não precisa ter “forma” jurisdicional, mas apenas “conteúdo” jurisdicional. Como já disse a Corte IDH no Caso do Tribunal Constitucional Vs. Peru<sup>32</sup>, “qualquer órgão do Estado que exerça funções de caráter materialmente jurisdicional tem a obrigação de adotar decisões vinculadas às garantias do devido processo legal nos termos do artigo 8º da Convenção Americana”.

Essa conclusão da Corte IDH não é pouca coisa. Ao investir a autoridade pública do Estado de um conceito material de juiz/tribunal, a jurisprudência da Corte IDH também passa a lhe exigir, por exemplo, a garantia de competência, independência e imparcialidade. Embora a redação do artigo 8.1 da CADH refira-se a “juiz ou tribunal competente, independente e imparcial”, em sucessivas sentenças a Corte IDH esclareceu que a qualificação de um órgão como “juiz” ou “tribunal” dependerá das funções por ele desempenhadas, e não por sua denominação. Se as

---

31 Laurence Burgorgue-Larsen e Amaya Úbeda de Torres, *The Inter-American Court of Human Rights: case-law and commentary*, Nova Iorque, Oxford University Press, 2011, p. 649.

32 Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso do Tribunal Constitucional Vs. Peru*, § 71.

decisões tomadas pelo órgão afetarem os direitos das pessoas, deve lhe ser exigido que seja “competente, independente e imparcial”<sup>33</sup>, independentemente se a autoridade pública for administrativa, legislativa ou judicial<sup>34</sup>.

Essa é mais uma prova de que o conceito de devido processo legal e de juiz ou tribunal devem ser reconstruídos a partir da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não é possível falar em conceitos de devido processo legal e de juiz/tribunal isolados no âmbito jurisdicional. Esses conceitos passam, então, a ser exigidos de qualquer autoridade pública, e não apenas dos órgãos jurisdicionais.

## 7. Conclusões

O presente estudo demonstrou que a interpretação da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos evoluiu no sentido de aplicar as garantias judiciais do artigo 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos às causas cíveis.

A aplicação do artigo 8. da CADH estende-se até mesmo a causas da natureza trabalhista, política, administrativa e eleitoral, incluindo causas “não-jurisdicionais”.

Os dados demonstraram ainda que essa conclusão é reforçada tanto pela competência consultiva quanto pela competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em

---

33 Cecilia Medina Quiroga, *La Convención Americana: vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso y recurso judicial*, Santiago, Universidade de Chile, 2003, p. 293.

34 Corte Interamericana de Direitos Humanos, *Caso do Tribunal Constitucional Vs. Peru*, § 71; Corte Interamericana de Direitos Humanos, *Caso Baena Ricardo e outros Vs. Panamá*, § 130.

diversos casos contenciosos e em pareceres consultivos, a Corte foi chamada a decidir sobre a aplicação das garantias do artigo 8º da CADH às causas cíveis e sempre respondeu positivamente.

É preciso, contudo, cautela quanto à aplicação das garantias mínimas do artigo 8.2 da CADH às causas cíveis. O estudo apresentou dados que comprovam que até mesmo as garantias mínimas do artigo 8.2 da Convenção Americana são aplicáveis às causas cíveis. No entanto, para essa aplicação ocorrer, deve haver uma compatibilidade entre a necessidade daquela garantia mínima e o devido processo legal.

Tudo isso significa que os estudos de processo civil devem acompanhar a evolução da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos quanto à aplicação do artigo 8º da CADH. Se a Corte Interamericana entende que esse artigo aplica-se às causas cíveis, então os estudos de processo civil não podem menosprezar a necessidade do exercício do controle de convencionalidade em relação às garantias judiciais do artigo 8º da CADH.

A pesquisa da jurisprudência também demonstrou que, com base nessa interpretação do artigo 8º pela Corte Interamericana, é possível reconstruir-se o conceito de devido processo legal e de juiz/tribunal mesmo fora do âmbito jurisdicional. O devido “processo” não é apenas o processo jurisdicional. O “juiz/tribunal” não é apenas o órgão jurisdicional. Essa conclusão, aliás, pode reforçar eventuais estudos e pesquisas sobre uma Teoria do Processo envolvendo processos não-jurisdicionais.

